



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta N° 58

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: RAFAEL ALBERTO MEDINA MOLINA
Demandado: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Radicado n.º: 05001-31-05-021-2018-00617-00 (20-142)

En Medellín, a los quince (15) días del mes de abril dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como Magistrado Ponente, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última, dentro del proceso ordinario instaurado por **RAFAEL ALBERTO MEDINA MOLINA** en contra de **COLPENSIONES**, en el proceso con radicado Nro. 05001-31-05-021-2018-00617-01 (20-142).

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, en calidad de magistrado ponente, deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente, SENTENCIA,

1. ANTECEDENTES

Actuando por intermedio de apoderado judicial, el señor RAFAEL ALBERTO MEDINA MOLINA instauró demanda con la que persigue el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez causado desde el 23 de febrero de 2015 hasta el 30 de abril de 2018, los intereses moratorios, así como las costas procesales, con sustento fáctico en que mediante Resolución SUB 99203 del 13 de abril de 2018 COLPENSIONES le concedió la pensión de invalidez desde el 1º de mayo de 2018 en cuantía equivalente a \$ 1.162.520, es decir, con corte de nómina, en razón a que el certificado de incapacidades reconocido por COOMEVA tiene más de 60 días de vigencia; que con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral (23/02/2015) tuvo solo 645 días de incapacidad, equivalente a 92.1 meses; que el 27 de abril de 2018 presentó

recurso de reposición y apelación pretendiendo el reconocimiento del retroactivo pensional; que mediante Resolución SUB 140264 del 25 de mayo de 2018, COLPENSIONES resolvió el recurso de reposición, reliquidando la pensión de invalidez a partir del 01 de mayo de 2018 en cuantía inicia de \$ 1.186.245; sin embargo, negó el retroactivo pensional bajo el argumento de que el certificado emitido por la EPS no cumple los requisitos de validez al no estar suscrito por el funcionario de la EPS; que mediante resolución DIR16840 del 17 de septiembre de 2018 se resuelve el recurso de apelación, confirmando la Resolución SUB 140264 del 25 de mayo de 2018, negando el retroactivo pretense en razón de que el certificado de incapacidades adolece de idoneidad.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 06 de diciembre de 2018 (fol. 51), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

El extremo pasivo de la relación procesal COLPENSIONES contestó la demanda el 14 de enero de 2019 (Fols. 53 a 57), oponiéndose a las pretensiones formuladas, con fundamento en que solo procede el reconocimiento de la pensión de invalidez una vez haya cesado el reconocimiento de la última incapacidad médica, hecho acaecido en el mes de mayo de 2018. Como medios enervantes de la acción propuso las excepciones de mérito que postuló imposibilidad de reconocimiento del retroactivo pensional de invalidez, prescripción, imposibilidad de condena en costas, y compensación.

A través de auto del 15 de enero de 2018 (Fol. 63), se tuvo por contestada la demanda por parte de COLPENSIONES.

1.2 DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 30 de abril de 2020 (fols. 66 con el CD de la audiencia), con la que se condenó a Colpensiones a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de invalidez en la suma de \$ 2.016.617 causado entre el 10 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2018, así como la indexación desde la causación de las mesadas reconocidas hasta que se verifique el pago, al tiempo de autorizar a la demandada a descontar los aportes al sistema general de seguridad social en salud, gravándola en costas procesales.

1.3 APELACIÓN

La decisión adoptada fue apelada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, quien manifiesta que la aplicación del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 debe corresponder con el contexto histórico, sin que se pueda sostener su aplicación exegética, ya que ello afectaría el principio de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues en el caso concreto la prestación debe corresponder al corte de nómina o último aporte, ya que el demandante después de la estructuración de la invalidez, no solo recibió incapacidades sino que continuó laborando y cotizando; que la aplicación del artículo 40 de la ley 100 de 1993 debe hacerse de manera amplia y no exegética como lo hizo el a quo con fundamento en que se trata de una condena pequeña; que debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el equilibrio financiero del sistema pensional.

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, la entidad opositora sostuvo que al demandante no le asiste derecho al retroactivo pensional, en razón a que el mismo se causa a partir de la última incapacidad, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, y lo señalado en el Concepto No 2006026318-001 del 10 de julio de 2006 por la Superintendencia Financiera, lo que evidencia que en el expediente pensional se reporta un certificado de incapacidades emitido por COOMEVA EPS, pero sin las formalidades exigidas, razón por la cual no se cuenta con material probatorio que sustente las pretensiones, y por esa vía, debe revocarse la decisión de instancia.

1.4 CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de COLPENSIONES se examinará igualmente la sentencia en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta.

2 ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, como también se revisará la sentencia

en el grado jurisdiccional de consulta en favor COLPENSIONES, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 PROBLEMA JURÍDICO:

Versa el punto neural del debate en resolver: ¿Si le asiste derecho al demandante a que Colpensiones le reconozca y pague el retroactivo de la pensión de invalidez desde el 10 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2018?, en caso afirmativo ¿Si hay lugar al reconocimiento y pago de la indexación?

2.3 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **CONFIRMATORIO**, en cuanto al valor del retroactivo reconocido; **revocatorio** frente a la condena al pago de intereses moratorios y la autorización de compensación, y **confirmatorio** en lo demás, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3.1 CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.

No es objeto de controversia que el demandante ostenta la calidad de pensionado por invalidez de conformidad con la Resolución SUB 99203 del 13 de abril de 2018 (fols. 15 a 21). Tampoco se encuentra en discusión que Colpensiones reconoció la prestación económica a partir del 1º de mayo de 2018 y que la fecha de la estructuración de la invalidez lo fue el 23 de febrero de 2015, de lo cual dan cuenta el citado acto administrativo y el dictamen N° 70191544-1617 del 09 de agosto de 2017 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez (Fols. 09 a 13).

Así las cosas, el debate se centra en establecer a partir de qué fecha el demandante causa el derecho al disfrute de la pensión, la cual para Colpensiones lo es desde el 1º de mayo de 2018, como así lo hizo saber en la Resolución SUB 99203 del 13 de abril de 2018 (fols. 15 a 21), en tanto que para el a quo, es desde el 10 de marzo de 2018, día siguiente a la última incapacidad reportada por COOMEVA EPS a folio 36.

En el contexto anterior, cumple anotar que el inciso final del artículo 40 de la ley 100 de 1993 dispone que la fecha de estructuración corresponde al momento desde el cuál procede el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva,*

desde la fecha en que se produzca tal estado”. Normativa que debe acompasar con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, reglamentario de la calificación de PCL, el cual prevé: “(...) En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.

Del mismo modo, ha de estarse al mandato del artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al *sub iudice* por disposición del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, y que prevé: *“Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”.*

Así las cosas, de la simple lectura de las normas citadas refulge la incompatibilidad del disfrute de la pensión de invalidez con el pago del subsidio o auxilio por incapacidad temporal, incompatibilidad que se estima razonable, en cuanto que la prestación económica del sistema general de seguridad social en salud se consagró en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, desarrollada por el artículo 28 del Decreto 806 de 1998, con la finalidad de suplir los ingresos salariales que no puede percibir el afiliado cotizante en razón de la afectación de su estado de salud para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual, mientras que la pensión de invalidez se consagró en el sistema general de pensiones para suplir el ingreso del cotizante que perdió la capacidad para laborar en razón a su estado de salud.

Es decir, que la finalidad de los artículos 3 del Decreto 917 de 1999 y 10 del Acuerdo 049 de 1990 es que un mismo afiliado no perciba simultáneamente dos prestaciones económicas del sistema de seguridad social integral, por la obvia razón de que ello constituiría un pago doble por el mismo riesgo, la afectación a la salud, lo que iría en desmedro de postulados constitucionales como la estabilidad financiera del sistema.

En orden a lo anterior, como el artículo artículo 40 de la Ley 100 de 1993 dispone el pago de la pensión de invalidez a partir de la fecha de estructuración de la PCL sin condiciones adicionales, el correcto entendimiento de la incompatibilidad contenida en los artículos 3 del Decreto 917 de 1999 y 10 del Acuerdo 049 de 1990 impone concluir que el auxilio de incapacidad impide el pago de las mesadas pensionales únicamente durante el lapso concreto y específico por el cual se percibió dicha incapacidad, y en consecuencia, debe reconocerse el pago de las mesadas pensionales por todo el tiempo en que no se pagó tal

auxilio, en tanto el pago de incapacidades no hace nugatoria la declaratoria de la invalidez como contingencia objeto de amparo del sistema general de pensiones.

Tal es el entendimiento que la Sala de Casación Laboral del máximo tribunal de la justicia ordinaria le ha dado a las citadas disposiciones, como en la sentencia SL1562-2019, de la cual se trasunta el apartado respectivo:

“De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.”

En claro lo anterior, y descendiendo al caso *sub litium*, una vez revisado el reporte de las incapacidades originario de la EPS COOMEVA S.A. (Fol. 36), se detalla que entre la fecha de estructuración de la invalidez el 23 de febrero de 2015 y la fecha en que se empezaron a pagar las mesas pensionales, 1º de mayo de 2018, al actor le fueron autorizados 580 días de auxilio por incapacidad, de manera interrumpida, es decir, que hay lapsos en los que no fueron continuas las incapacidades.

De forma que, no procedía el reconocimiento del disfrute pensional a partir de la última incapacidad reportada, sino que se debía verificar si en el lapso del 23 de febrero de 2015 al 1º de mayo de 2018, el actor recibió el subsidio de incapacidad, de lo contrario lo procedente era que, del retroactivo de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, descontarse los días de incapacidad, habida cuenta que el auxilio de incapacidad es incompatible con el pago de la mesada pensional; no obstante, como en el *sub examine*, la decisión que tomó el a quo fue otorgar la prestación desde el día siguiente a la última incapacidad reportada (10 de marzo de 2018), y ello no fue objeto de reparo por la parte demandante, de donde se sigue que habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia, sin que haya lugar a la prosperidad de la alzada propuesta por COLPENSIONES, ya que las consideraciones anteriores no devienen de la interpretación exegética del artículo 40 de la ley 100 de 1993, sino de la aplicación armónica de las premisas normativas y jurisprudenciales que regulan la materia, como lo son el artículo 10º del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al *sub iudice* por disposición del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, desarrollado por el artículo 28 del Decreto 806 de 1998, y lo adoctrinado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en la sentencia SL1562-2019.

De frente a la excepción de prescripción (fol. 55), debe decirse que, el dictamen de pérdida de capacidad laboral fue notificado el 17 de agosto de 2017 (fol. 9), la prestación económica se reclamó el 20 de diciembre de 2017 (fol. 15), y la demanda se instauró el 14 de noviembre de 2018 (Fol. 6), esto es, que entre tales calendas no transcurrieron más de los 3 años a que alude los artículos 151 del C.P.T y de la S.S, y 488 del CST, debiéndose confirmar la sentencia materia de estudio en cuanto declaró impróspero tal medio exceptivo.

Consecuente con lo anterior, se obtiene como retroactivo pensional por el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2018 la suma de **\$2.016.617**, valor que es similar al que fulminó como condena el a quo, y para ello se tuvo en cuenta que el valor de la mesada pensional determinado en la Resolución SUB 140264 del 25 de mayo de 2018 (fol. 34) no objeto de la litis, y conforme la siguiente tabla.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	Valor reconocido	# mesadas	Total retroactivo
2018	3,18%	\$ 1.186.245	1,7	\$ 2.016.617
			TOTAL	\$ 2.016.617

Igualmente, se impartirá confirmación a la autorización a la entidad opositora para que descuente del retroactivo pensional las cotizaciones que por mandato legal deben hacerse para el sistema general de seguridad social en salud, de conformidad con los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, como en la sentencia del 6 de marzo de 2012, Radicado 47528.

2.3.2 INDEXACIÓN

Debe tenerse en cuenta que el a quo, procedió a impartir condena por indexación haciendo uso de las facultades ultra y extra petita, ya que tal pretensión no fue formulada en el libelo genitor, ante lo cual, esta Sala confirmará tal condena, pues si bien es cierto se venía sosteniendo que para proceder a la condena debía estar formulada la pretensión de indexación en la demanda, o que la misma sea objeto de discusión en la primera instancia, lo cierto es que, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL359-2021, fijó un nuevo criterio y recogió la tesis según la cual la corrección monetaria únicamente procedía a petición de parte, para en su lugar,

establecer el criterio de que “*el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa*”, concluyéndose en tal providencia que:

“la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral”.

Ello así, como en el sub examine, el derecho objeto de condena se ve menguado por el hecho notorio de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, deberá Colpensiones cancelar las sumas de dinero ordenadas por concepto de retroactivo pensional debidamente indexada a partir de su causación y hasta la fecha en que se cancele la obligación, utilizando la fórmula establecida para el efecto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en numerosos de sus fallos.

2.3. COSTAS

Sin costas en esta instancia, pues si bien COLPENSIONES presentó recurso de apelación, la sentencia se revisó en su integridad en su favor en virtud del grado jurisdiccional de consulta. Las de primera instancia se confirman.

3 DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 30 de abril de 2020 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en los términos y según los criterios establecidos en la parte motiva de este proveído.


SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera se confirman.


Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial
Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la
firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta
de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín.


Secretario Sala Laboral



Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 63** fijados hoy en la secretaria de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 16 de abril de 2021, y pueden consultarse en <https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario